

**RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE LUGAR, FORMULADAS POR EL CIUDADANO GONZALO MORENO ARÉVALO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSE-QUEJA-007/2020.**

**R E S U L T A N D O S :<sup>1</sup>**

**1. Presentación del escrito de denuncia.** El diecinueve de noviembre se recibió en la oficialía de partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,<sup>2</sup> un escrito de queja suscrito por el ciudadano **Gonzalo Moreno Arévalo**, en su carácter de Presidente del Comité Directivo del partido estatal SOMOS, en el que se denuncian hechos que consideran violatorios de la normatividad electoral vigente en el estado de Jalisco.

**2. Acuerdo de radicación, prevención, ampliación de término y práctica de diligencias.** El veinte de noviembre la secretaría ejecutiva del instituto dictó el acuerdo en el que radicó el escrito de denuncia con el número de expediente **PSE-QUEJA-007/2020** y se previno al denunciante para que precisara el nombre de los denunciados y proporcionara su domicilio para estar en posibilidad de llevar a cabo los emplazamientos respectivos.

De igual manera se amplió el plazo para resolver sobre la admisión o desechamiento de la denuncia; además, se ordenó la realización de la diligencia consistente en la

<sup>1</sup> Los hechos que se narran corresponden al año dos mil veinte.

<sup>2</sup> El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en lo sucesivo será referido como instituto.

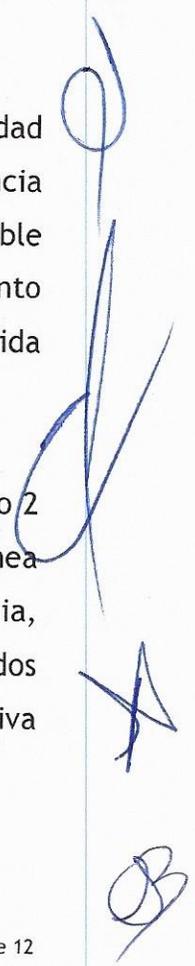
verificación del contenido de un *link* de internet proporcionado por el promovente en el escrito de denuncia.

**3. Acta circunstanciada.** El veintidós de noviembre se elaboró el acta circunstanciada mediante la cual personal de la oficialía electoral debidamente investido de fe pública y legalmente facultado para el ejercicio de dicha función, verificó la existencia y contenido del *link* de internet precisado en el escrito de queja.

**4. Cumplimiento de la prevención.** El veinticuatro de noviembre, Gonzalo Moreno Arévalo dio cumplimiento a la prevención formulada; dicha contestación quedó registrada con el folio 01413.

**5. Acuerdo de admisión parcial.** El veinticuatro de noviembre, la autoridad instructora dictó el acuerdo en el que admitió a trámite parcialmente la denuncia formulada. Es decir, el promovente señaló como actos denunciados la posible difusión de propaganda calumniosa y actos relativos a la remoción y nombramiento de dirigencias del partido político estatal SOMOS, es decir, relacionados con la vida interna del instituto político.

En el acuerdo se razonó que de conformidad con los artículos 471 y 472, párrafo 2 del código en la materia, el procedimiento sancionador especial es la vía idónea para conocer los actos relativos a la posible difusión de propaganda que calumnia, sin embargo, no es la vía jurídica correcta para conocer de asuntos relacionados con la vida interna de los partidos políticos, pues esta autoridad administrativa carece de la competencia para pronunciarse.



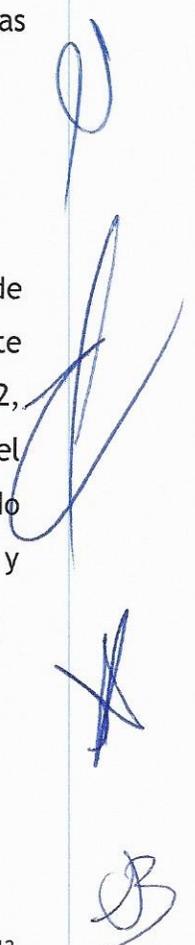
Con base en lo anterior, se precisa que la presente resolución únicamente resolverá respecto de los actos que sí fueron admitidos a trámite en el presente procedimiento sancionador, es decir, por **la posible difusión de propaganda que calumnia.**

**6. Proyecto de medida cautelar y remisión de constancias.** Mediante memorándum 128/2020 notificado el veinticinco de noviembre, la secretaría ejecutiva, hizo del conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto el contenido del acuerdo citado en el resultando que antecede y remitió copias de las constancias que integran el expediente PSE-QUEJA-007/2020, a efecto de que este órgano colegiado determinara lo conducente sobre la adopción de las medidas solicitadas por el denunciante.

#### CONSIDERANDO:

**I. Competencia.** Al tratarse de un asunto relacionado con la posible adopción de medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias es el órgano competente para determinar lo conducente, en términos de lo dispuesto por los artículos 472, párrafo 9, del Código Electoral del Estado de Jalisco;<sup>3</sup> 45, párrafo 1, fracción III, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 1 y 10, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

<sup>3</sup> El Código Electoral del Estado de Jalisco, en lo sucesivo será referido como el código.

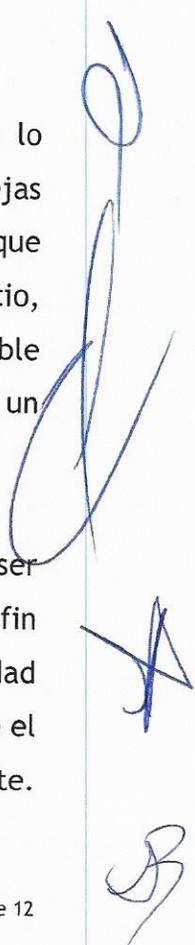




- Original impreso de la nota periodística que aparece publicada en el periódico Mural, de fecha 12 de noviembre del año en curso, en la página 2 de la sección de COMUNIDAD;
- Nota periodística que aparece en el siguiente enlace de internet, lo que constituye un hecho público y notorio: [https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\\_rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/remueven-por-abusos-a-lider-de-somosjalisco/ar2068623?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--](https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/remueven-por-abusos-a-lider-de-somosjalisco/ar2068623?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--).
- Los escritos y documentos que eventualmente llegasen a presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, las personas denunciadas y de las demás que resulten implicadas y que se desprendan de los mismos, por lo cual me reservo mi derecho a realizar la correspondiente ampliación de denuncia;  
...”

**V. Naturaleza y finalidad de las medidas cautelares.** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 472, párrafo 9, del Código; y 10, del Reglamento de Quejas y Denuncias de este instituto; las medidas cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.

Por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.



En consecuencia, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares a la vez que constituyen un instrumento de otra resolución, también sirven para tutelar el interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente, una situación que se califica como ilícita.

Ello, con la finalidad, como ya se apuntó con anterioridad, de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable.

Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se cumpla el principio de legalidad, la fundamentación y motivación deberá ocuparse cuando menos, de los aspectos siguientes:

- a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y,
- b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama (*periculum in mora*).

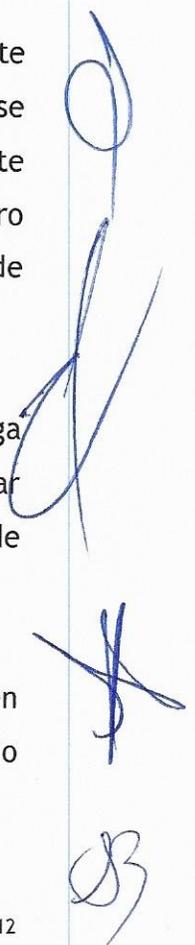
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como *fumus boni iuris* -apariencia del buen derecho- unida al *periculum in mora* -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final-.

Sobre el *fumus boni iuris* o apariencia del buen derecho, se debe precisar que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. Por su parte, el *periculum in mora* o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

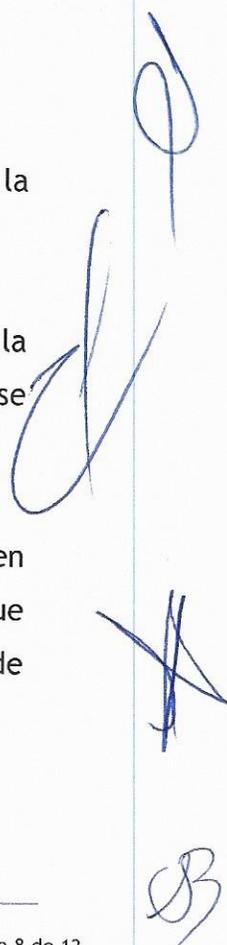
En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño



inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

Como se puede observar de todo lo anteriormente explicado, es inconcuso entonces que la ponderación de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:

- a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
- b) Justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.
- c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.
- d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y, si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.



De esa forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados. Todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

**VI. Pronunciamiento respecto de la solicitud de adopción de la medida cautelar.**

Precisado lo anterior y, considerado en su integridad el escrito de queja y las pruebas que obran en el expediente, se analiza la pretensión, consistente en que esta autoridad ordene a los medios de comunicación no difundir noticias sobre la su destitución del promovente como presidente del partido estatal SOMOS, hasta en tanto un eventual cambio de dirigencia se encuentre debidamente aprobado por el Consejo General de este instituto.

Para estar en aptitud de dar respuesta a la solicitud del actor, es importante precisar que en el momento procesal en el que se dicta la presente resolución, no se ha determinado que el medio de comunicación denunciado, periódico Mural (ni ningún otro), sea responsable de difundir propaganda calumniosa en contra del denunciante.

El análisis de la acreditación de dicha infracción, corresponde a la instancia jurisdiccional, por lo que no debe darse por hecho, como pretende el actor, que la sola publicación de la nota periodística constituye propaganda calumniosa en su contra.

Establecido lo anterior, a juicio de las integrantes de este órgano colegiado, la solicitud de la adopción de medidas cautelares en los términos precisados por el denunciante escapa del ámbito de atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, es decir, emitir una medida cautelar con efectos generales sobre **actos futuros de realización incierta**.

Lo anterior, toda vez que, si bien la Comisión está facultada para ordenar medidas cautelares, éstas no deben versar sobre actos futuros de realización incierta ni mucho menos dirigidas de manera generalizada hacia los medios de comunicación, pues esta autoridad no puede hacer extensivos los efectos a situaciones que constituyen actos sobre su probable realización, pues escapa de la naturaleza de las medidas cautelares al contar con un diseño jurídico para impactar únicamente en el procedimiento iniciado con motivo de una denuncia y sobre la conducta de las personas en concreto.

Por tanto, las facultades de esta autoridad administrativa electoral no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de realización incierta, que especulan sobre la posible comisión de infracciones en la materia, pues como se señaló su naturaleza es claramente preventiva y **sujeta a los hechos denunciados con sustento en bases claramente objetivas.**<sup>4</sup>

Al considerar lo contrario, se estaría pasado por alto el derecho fundamental a la libertad de expresión, cuya restricción podría constituir cesura previa, por ello, las autoridades administrativas no pueden, en ejercicio de sus facultades, adicionar otras limitantes respecto de ese derecho humano que impliquen un examen previo

<sup>4</sup> Similar criterio fue sostenido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-82/2020.

en cuanto a la veracidad de lo expresado, ello implica apartarse de lo previsto en la Constitución, los tratados internacionales y la ley.<sup>5</sup>

Por lo antes expuesto, resulta inviable conceder al denunciante su petición consistente en ordenar a los medios de comunicación no difundir noticias sobre su remoción como presidente del partido estatal SOMOS.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafos 1 al 6 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Por lo que hace a la acreditación de las infracciones denunciadas, relativas a la posible difusión de propaganda que calumnia, como ya se anticipó, le corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ello de conformidad con el artículo 474 Bis, párrafo 3, fracción V del código en la materia.

Las situaciones expuestas a lo largo del presente considerando, no prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas, es decir, la misma no prejuzga respecto de la existencia de una infracción que pudiera llegar a determinar la autoridad competente, al someter los mismos hechos a su consideración.

Por las consideraciones expuestas esta Comisión

<sup>5</sup> Criterio contenido en la Tesis XII/2009 de rubro: CENSURA PREVIA. EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUJETA, DE MANERA ANTICIPADA, LAS EXPRESIONES QUE SE HACEN EN LA PROPAGANDA POLÍTICA, A UNA RESTRICCIÓN DISTINTA A LAS PREVISTAS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

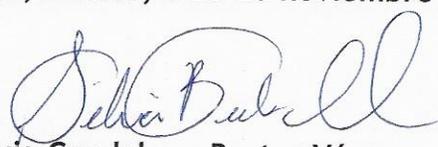
**RESUELVE:**

**Primero.** Se declara **improcedente** la medida cautelar solicitada en el expediente PSE-QUEJA-007/2020, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución.

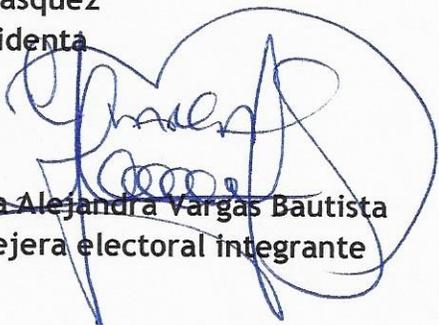
**Segundo.** Túrnese a la secretaría ejecutiva de este instituto a efecto de que notifique el contenido de la presente determinación en términos de ley.

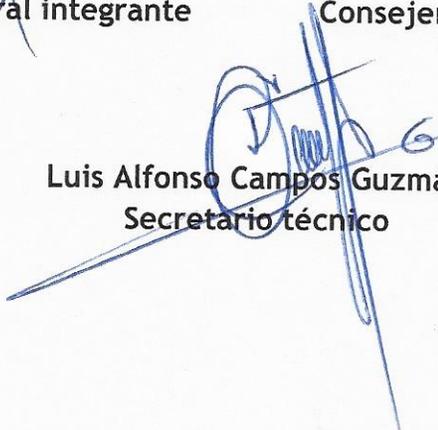
Por la Comisión de Quejas y Denuncias

Guadalajara, Jalisco, a 26 de noviembre de 2020

  
**Silvia Guadalupe Bustos Vásquez**  
Consejera electoral presidenta

  
**Zoad Jeanine García González**  
Consejera electoral integrante

  
**Claudia Alejandra Vargas Bautista**  
Consejera electoral integrante

  
**Luis Alfonso Campos Guzmán**  
Secretario técnico